



Asamblea General

Quincuagésimo sexto período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general
21 de marzo de 2002
Español
Original: inglés

Tercera Comisión

Acta resumida de la 9ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 12 de octubre de 2001, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Al-Hinai. (Omán)

Sumario

Tema 110 del programa: Prevención del delito y justicia penal (*continuación*)*

Tema 111 del programa: Fiscalización internacional de drogas (*continuación*)*

* Temas que la Comisión ha decidido examinar conjuntamente.

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.



Se declara abierta la sesión a las 15.20 horas.

Tema 110 del programa: Prevención del delito y justicia penal (A/56/3, 83, 151, 155, 222, 380, A/56/402-E/2001/105 y A/56/403 (*continuación*))

Tema 111: Fiscalización internacional de drogas (A/56/3, 83, 157 y 222) (*continuación*)

1. **El Sr. García González** (El Salvador), hablando en nombre de los países centroamericanos y de la República Dominicana, dice que sus gobiernos comparten las opiniones expresadas por el representante de Chile en nombre del Grupo de Río y reafirma su voluntad política de hacer frente al problema mundial de las drogas a todos los niveles y fortalecer la cooperación internacional como instrumento eficaz para combatirlo.

2. Esos países han venido trabajando en varias esferas interrelacionadas para cumplir con los requisitos internacionales esenciales de la lucha contra las drogas. Entre los esfuerzos más importantes cabe citar: la elaboración, adopción y aplicación de planes nacionales de lucha contra las drogas; la firma y ratificación de la Convención interamericana sobre asistencia recíproca en asuntos penales y la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados; el diseño y la aplicación de un sistema integrado para recopilar, analizar y mantener estadísticas y documentos sobre la reducción de la oferta y la demanda de drogas y sobre las medidas de control; la elaboración y adopción de una estrategia nacional de reducción de la demanda basada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas; el establecimiento o fortalecimiento de programas de prevención; y la realización de estudios para determinar la dimensión del consumo de drogas entre la población general.

3. En el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, los países de Centroamérica y la República Dominicana han contribuido a la elaboración de un mecanismo multilateral de evaluación para supervisar los progresos conseguidos en los esfuerzos del hemisferio por hacer frente al problema; el mecanismo hizo recomendaciones periódicas a los Estados Miembros encaminadas a mejorar su capacidad para controlar el abuso y el tráfico de las drogas y fortalecer la cooperación multilateral.

4. A nivel subregional, se han hecho esfuerzos para elaborar un plan de acción centroamericano en el marco de la Comisión Permanente Centroamericana para la erradicación del abuso, la producción y el tráfico ilícito de drogas, teniendo presentes los elementos definidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y el Plan de Acción conexo aprobado por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones.

5. La comunidad internacional ha alcanzado un consenso histórico en torno a la necesidad de combatir el terrorismo en todas sus formas, así como a todos los grupos que utilizan el terror y la violencia contra los civiles como medio para alcanzar sus objetivos, que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Los grupos que han obtenido su riqueza del tráfico de drogas, la delincuencia organizada, el tráfico de armas y delitos similares, incluido el blanqueo de dinero, son una lacra de la sociedad y la comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos por combatirlos con la misma energía y determinación con la que se lucha contra los grupos terroristas.

6. **El Sr. Stuart** (Australia) dice que en la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia, aprobada en el Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente se reconoce la necesidad de que la comunidad internacional haga frente a los retos que plantea la delincuencia organizada transnacional. Se reconoce la necesidad de que los Estados cooperen en la lucha contra las actividades delictivas de alcance mundial, especialmente el contrabando y la trata de personas.

7. El contrabando de personas es una cuestión de especial preocupación para muchos países, no sólo para los que son países de destino, como Australia, sino también para los países de origen y de tránsito. Se trata de una creciente esfera de actividad delictiva transnacional que trata de aprovecharse de la desgracia de los desposeídos y vulnerables. La rentabilidad del contrabando y la trata de personas rivaliza con la de los narcóticos, con unos beneficios que se estiman en unos 10.000 millones de dólares al año, y parece que las mismas redes delictivas participan en ambas actividades. Australia está firmemente decidida a luchar contra el contrabando de personas. Mediante sus políticas y leyes trata de prevenir y dificultar las actividades de esas redes delictivas. Sin embargo, ningún país u organización puede resolver el problema por sí solo.

8. La comunidad internacional no debe permitir que los contrabandistas de personas y los que contratan sus servicios abusen del sistema de protección de los refugiados. Es necesario desplegar un esfuerzo internacional decidido para elaborar un enfoque coherente mediante la aplicación de leyes eficaces que castiguen a los delincuentes, fortalecer la protección y vigilancia de las fronteras, desarrollar de sistemas que velen por la pronta devolución y readmisión de los migrantes ilegales y fomentar la cooperación entre los organismos encargados del cumplimiento de la ley. Las Naciones Unidas deben desempeñar un papel importante y tienen que adoptar una respuesta más coordinada.

9. Australia continuará trabajando en estrecha cooperación con sus asociados regionales para examinar la forma de encontrar soluciones regionales. Tratará también de encontrar soluciones multilaterales por conducto de las Naciones Unidas, centrándose especialmente en los compromisos contenidos en la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia y en la aplicación de los programas existentes de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. Insta a los Estados Miembros a que contemplen con la urgencia necesaria el problema de la delincuencia organizada transnacional y que aumenten su apoyo a los esfuerzos internacionales por combatir el contrabando de personas mediante una más estrecha cooperación regional e internacional.

10. **El Sr. Mei Yuncai** (China) dice que, debido a los adelantos científicos y tecnológicos y al crecimiento de las comunicaciones, hoy día son muchas las actividades delictivas que trascienden las fronteras y se extienden al mundo político y económico causando graves daños al orden social, la estabilidad política y el desarrollo económico de los Estados. Su delegación apoya las recientes actividades de las Naciones Unidas en lo que se refiere a la prevención del delito y la justicia penal.

11. Su Gobierno ha colaborado en la redacción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, que figuran como anexos de la resolución 55/25 de la Asamblea General, y firmó la Convención el día en que se abrió a la firma. La Convención sólo puede cumplir su función prevista en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional si se aplica de forma eficaz. Teniendo en cuenta las muchas dificultades prácticas a que se enfrentan los países en desarrollo, la comunidad internacional debe proporcionarles asistencia técnica y financiera para que puedan aplicar la Convención y

colaborar en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

12. La lucha contra la corrupción se ha convertido en una tarea común de todos los países. El intercambio de experiencias, así como la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, ayudarán a resolver el problema. China participa activamente en la redacción de un instrumento contra la corrupción, como se solicitó en la resolución 55/61 de la Asamblea General.

13. Los grupos que se dedican a la delincuencia organizada transnacional representan en la actualidad la forma más nociva de delincuencia a que se enfrenta la humanidad, y muchos de esos grupos mantienen una estrecha conexión con actividades terroristas. El Gobierno de China está dispuesto a unirse a otros gobiernos y a las Naciones Unidas para prevenir y combatir esa delincuencia con el fin de salvaguardar el desarrollo económico y social.

14. **La Sra. Seo Bihn** (República de Corea) dice que la comunidad internacional ha conseguido grandes avances en la prevención del delito. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos son el principal vehículo para erradicar la corrupción, la trata de personas y la delincuencia organizada transnacional, y los Estados Miembros deben firmarla y ratificarla con prontitud.

15. La aprobación de la Convención y sus protocolos supuso un impulso para un marco internacional contra la corrupción. Su delegación confía en que el espíritu de cooperación que prevaleció durante la aprobación de la Convención continúe durante las próximas negociaciones sobre el instrumento jurídico internacional contra la corrupción que actualmente se está elaborando de conformidad con la resolución 55/61 de la Asamblea General. Su Gobierno se ha ofrecido para acoger en Seúl, en 2003, el Tercer Foro Mundial sobre la Lucha contra la Corrupción y la 11ª Conferencia Internacional contra la Corrupción.

16. Como las responsabilidades del Centro para la Prevención Internacional del Delito han aumentado, es necesario fortalecer la base financiera del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal mediante recursos del presupuesto ordinario y contribuciones voluntarias de los Estados Miembros. Entre tanto, el Programa debe centrarse en esferas prioritarias viables, tratando siempre de mejorar la eficacia de la asistencia técnica.

17. El control de la fabricación y transferencia de drogas ilícitas es otro problema que requiere atención. Su Gobierno ha reafirmado su compromiso con los planes de acción y demás medidas adoptadas por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones. La mayoría de los Estados Miembros han instituido una estrategia nacional de lucha contra las drogas en las que se incorporan las metas y objetivos establecidos en el período extraordinario de sesiones y, mediante la voluntad política y el apoyo internacional, el comercio de drogas ilícitas se ha reducido en algunas regiones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional contribuye además a la cooperación judicial y a que se tipifique como delito el blanqueo de dinero. Sin embargo, es necesaria una firme resolución para fortalecer la cooperación internacional en lo que se refiere a la prevención del delito.

18. Los jóvenes consumen cada vez más drogas sintéticas por la disponibilidad sin restricciones de sus precursores, la simplicidad de su fabricación y la dificultad que supone el control de las materias primas en constante cambio que se utilizan para su producción. Así pues, es imperativo mantener el compromiso de compartir información acerca de nuevos productos químicos utilizados para su fabricación y volver a evaluar el alcance del control de las sustancias.

19. **La Sra. Limpías** (Bolivia), hablando en nombre de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), dice que la voluntad política de sus gobiernos para combatir las drogas ilícitas se refleja en la aplicación del Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, establecido en la reunión en la cumbre de los Presidentes de los países de la Comunidad Andina celebrada en junio de 2001.

20. A ese respecto, cabe decir que la apertura de los mercados mundiales a los productos de los países comprometidos en la lucha contra las drogas sería una importante contribución a sus esfuerzos. La renovación y ampliación del Acta Andina de Preferencias Comerciales, que expirará el 4 de diciembre de 2001, son esenciales para el futuro del esfuerzo común. Ese régimen ha supuesto una importante contribución al desarrollo económico y social de los países andinos por cuanto ha ayudado a generar empleo y alternativas lícitas a la realización de actividades relacionadas con la producción y el tráfico de drogas. Ese modelo, junto con otros como el Sistema de Preferencias Generalizadas para los Andes

concedido por la Unión Europea, son extremadamente útiles. De hecho, el compromiso de los países industrializados para mejorar la situación económica y social en los países andinos resulta esencial.

21. **El Sr. Chuguihuara** (Perú) se asocia a las declaraciones formuladas por el representante de Chile, que ha hablado en nombre del Grupo de Río, y por la representante de Bolivia, que lo ha hecho en nombre de la Comunidad Andina.

22. El representante del Perú afirma que la producción y el consumo y el tráfico ilícito de drogas continúan planteando un grave problema para la humanidad. Recordando las medidas adoptadas en el vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, hace hincapié en que la mundialización del problema de las drogas exige un mayor compromiso de participación de la comunidad internacional basado en una responsabilidad compartida, con arreglo a la capacidad económica de cada país y con pleno respeto al derecho internacional. Requiere también un enfoque integrado en el que no se favorezca ningún aspecto en detrimento de los demás.

23. En consecuencia, el Perú favorece una mayor cooperación internacional en la lucha contra esa lacra mediante mecanismos bilaterales y multilaterales para fomentar la capacidad operativa de las fuerzas de defensa de la ley y el orden y la financiación de proyectos alternativos de desarrollo en las zonas productoras de drogas que no supongan un costo extraordinario para los países beneficiarios. Deben establecerse también canales estables para la corriente de inversiones y para la colocación en condiciones preferenciales de los productos de esas zonas en los mercados internacionales.

24. Uno de los objetivos básicos de la política de desarrollo de su Gobierno es la erradicación de todos los aspectos del comercio de drogas sobre la base de tres objetivos: la reducción del cultivo de coca mediante su sustitución por un desarrollo alternativo y la aplicación de programas de conservación ambiental; la adopción de medidas globales de prevención y tratamiento para reducir el abuso de las drogas; y la supresión, mediante la represión policial, de la producción y el tráfico ilícitos, en interés de la dignidad y los derechos humanos.

25. Esos objetivos han ido de la mano de una triple estrategia de prohibición, desarrollo alternativo y prevención y rehabilitación, en estricto cumplimiento de los acuerdos concertados y las declaraciones internacionales. Una prohibición adecuadamente concebida y vigila-

da es esencial para generar las condiciones favorables al desarrollo alternativo, sin el cual se reduciría la rentabilidad de los productos agrícolas lícitos, al mismo tiempo que es necesario garantizar la seguridad y hacer que sean viables la inversión y las actividades productivas necesarias para la aplicación de programas alternativos.

26. La existencia en el Perú de grandes extensiones de tierra dedicadas a cosechas ilegales ha surgido a menudo de las necesidades socioeconómicas de los agricultores y de las presiones de los grupos criminales organizados, alimentadas por la creciente demanda internacional. Así pues, el Perú considera el desarrollo alternativo, tanto en forma de sustitución de cosechas como de la creación de actividades económicas nuevas, rentables y ambientalmente sostenibles que permitan a los habitantes escapar del pernicioso circuito internacional de la droga, como una estrategia prioritaria para reducir la producción de las materias primas utilizadas en la fabricación de drogas.

27. El fenómeno de las drogas tiene un importante componente de seguridad nacional. Muy recientemente, la inestabilidad social económica en el Perú ha servido para vincular el tráfico de drogas con el terrorismo, lo que inevitablemente destruye los cimientos de cualquier sistema político, económico o social. Por ese motivo, el Perú está dispuesto a fortalecer el tejido social con miras a encontrar soluciones duraderas.

28. Por último, en la resolución de su Gobierno por erradicar la lacra de las drogas, el Presidente Toledo ha nombrado recientemente un “zar antidroga”, cuya única tarea será la lucha contra el grave problema de las drogas que padece el país.

29. **El Sr. Valdivieso** (Colombia) hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se aplique al problema de las drogas un enfoque global y equilibrado basado en la responsabilidad compartida, como se acordó en el vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. El reconocimiento de la naturaleza mundial del problema y de la necesidad de hacer de la lucha contra ese problema una causa común ha sido uno de los principales avances.

30. Como se señaló en el Informe Hemisférico 1999-2000 del Mecanismo de Evaluación Multilateral para el Control de las Drogas, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el tráfico de drogas se ha hecho más sofisticado y utiliza los medios que pone a su alcance la mundialización. Para el tráfico de drogas ilícitas, sustancias controladas y armas, así como para el

blanqueo de dinero, los grupos criminales organizados utilizan los recursos y mecanismos del comercio internacional de bienes y servicios. Ahora, con la llegada de la mundialización, los efectos nocivos del tráfico de drogas y sus males asociados trascienden las fronteras y amenazan a todas las naciones.

31. En la Cumbre de las Américas celebrada en 2001, el Presidente Pastrana hizo hincapié en que el problema de la droga no era sólo de Colombia, sino que tenía su epicentro en todos los países de América que, de una u otra forma, eran eslabones en la cadena de dolor y muerte.

32. De la misma manera, la mundialización ofrece posibilidades para la adopción de medidas concertadas en la lucha contra las drogas ilícitas. Con ese fin, sin embargo, es necesario abandonar las posiciones locales en favor de las medidas conjuntas en todas y cada una de las etapas. A ese respecto, su país otorga prioridad al compromiso formulado en la Declaración política adoptada en el vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de establecer para 2003 estrategias nuevas o mejoradas de reducción de la demanda. Su declaración subraya que para alcanzar esos objetivos es necesaria la plena aplicación de la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y su Plan de Acción.

33. Hay una urgente necesidad de elaborar estrategias bien planificadas con las que poder abordar los problemas que plantean las drogas sintéticas, que los expertos consideran el segmento más floreciente del comercio mundial de drogas. Una guerra global y equilibrada contra las drogas ilícitas entraña no sólo un ataque contra la oferta y la demanda, sino también una acción firme contra los delitos relacionados con las drogas. Las medidas individuales y subregionales no pueden ser suficientes. El problema exige una política intensiva a corto, medio y largo plazo que dé apoyo a los principios del multilateralismo, la responsabilidad compartida y el equilibrio.

34. A nivel nacional, Colombia todavía lucha por extinguir las llamas que las drogas han añadido al conflicto interno por el que atraviesa el país; a nivel andino, trabaja en pro de la aplicación del Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos; y a nivel hemisférico, el Ministro de Relaciones Exteriores ha pedido que se convoque una conferencia especializada para determinar nuevas actividades de carácter político y de cooperación técnica

de ámbito interamericano bajo los auspicios de la OEA y las Naciones Unidas.

35. Desde el 11 de septiembre, la comunidad internacional ha participado estrechamente en la lucha contra el terrorismo. Conviene recordar que las redes financieras que utiliza el terrorismo son similares, si no las mismas, que las que prestan servicio al tráfico de drogas y de armas ilícitas, especialmente de armas pequeñas y ligeras.

36. Hacer frente al terrorismo en un espíritu de responsabilidad compartida entraña una batalla frontal contra esas redes y un asalto contra el blanqueo de dinero, que es su fuente de financiación. La asistencia de la comunidad internacional es fundamental a ese respecto, y las Naciones Unidas tienen un papel que desempeñar en el fomento del programa mundial contra el blanqueo de dinero de la Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, que presta cooperación técnica a los países y se ocupa de realizar investigaciones. Además de su presencia permanente en el programa de las comisiones de estupefacientes y de prevención del delito y justicia penal, las medidas para combatir el blanqueo de dinero exigen un enfoque más firme y completo.

37. Los países que se enfrentan al problema mundial de las drogas ilícitas confían en que sus esfuerzos y logros recibirán un reconocimiento justo y cabal. Como ya se ha dicho, su Gobierno está dispuesto a contribuir a ese esfuerzo en un espíritu de resolución y solidaridad.

38. **El Sr. Tarabrin** (Federación de Rusia) dice que en los últimos años se ha experimentado un crecimiento sin precedentes en la delincuencia transnacional, lo que representa una amenaza para la propia estabilidad y seguridad de los gobiernos. También ha impulsado el crecimiento del terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas. La comunidad internacional debe responder vigorosamente a ese peligro, no como gobiernos individuales o grupos de países, sino a escala mundial, y las Naciones Unidas tienen un papel esencial que desempeñar en la coordinación de esa respuesta. Las Naciones Unidas también han ofrecido una base sólida en el derecho internacional para los esfuerzos de los gobiernos por combatir la delincuencia y, a ese respecto, la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional ha sido un hito. La adhesión universal a ese instrumento dará eficacia a los mecanismos que contiene.

39. La corrupción y el blanqueo de dinero requieren también la adopción de medidas internacionales. Debe comenzar lo antes posible el trabajo en el texto de un futuro instrumento jurídico contra la corrupción. Su Gobierno percibe un instrumento de esas características como una necesidad estratégica: tan sólo en el último año ha perdido más de 3.000 millones de dólares a causa de la corrupción. Esos esfuerzos requerirán una estrecha cooperación y canales claros para el intercambio de información. La Federación de Rusia ha adoptado medidas para fortalecer su marco jurídico en esa esfera.

40. Los problemas del abuso de las drogas y del tráfico ilícito de estupefacientes se han agravado en Rusia en el último decenio, y su delegación confía en que se fortalezca la función coordinadora de las Naciones Unidas en la respuesta mundial a esos problemas. La Federación de Rusia acoge con agrado los resultados del 44º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes y las medidas complementarias del vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

41. Casi dos terceras partes de las drogas ilícitas que entran en la Federación de Rusia tienen su origen en el Afganistán, y a menudo tienen su destino en los mercados de Europa occidental y América del Norte. Su delegación apoya firmemente los esfuerzos del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) por controlar esa corriente. Teniendo en cuenta el conflicto que actualmente se desata en esa parte de Asia, se están haciendo esfuerzos para que el comercio ilícito de drogas no se desvíe hacia otros países de Asia central, y su delegación aprecia el apoyo que se está prestando a los esfuerzos de los propios Gobiernos de Asia central por combatir esa lacra. Apoya también a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en su postura en contra de la legalización de algunos estupefacientes o su retirada del control gubernamental.

42. Su Gobierno cooperará plenamente con los demás Estados Miembros en la lucha a largo plazo contra la delincuencia internacional y el comercio ilícito de drogas.

Se levanta la sesión a las 16.20 horas.